EL DERECHO PÚBLICO POTOSINO EN LOS ALBORES
DE LA INDEPENDENCIA Y DURANTE
EL PRIMER IMPERIO (1808-1824)

Jesús MOTILLA MARTÍNEZ

SUMARIO: Prólogo; I. El derecho público potosino a finales del virreinato
(la intendencia potosina); II. Las transformaciones ideológicas en materia
de gobierno y derecho: el impacto de la Constitución de Cádiz; III. El entorno potosino durante el período de la insurgencia; IV. El esfímero primer
imperio de Iturbide: su impacto en San Luis Potosí; V. La evolución del
derecho público potosino durante la época insurgente y el imperio de Itur-
bide; VI. A manera de epílogo; VII. Fuentes de investigación (documentales
y bibliográficas).

PRÓLOGO

Cuando la Facultad de Derecho y el Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de México nos invitaron al Sexto
Congreso de Historia del Derecho Mexicano, cuya celebración sería a finales de 1994, y dentro de las recomendaciones respecto a ponencias manifiestaron como tema de interés los aspectos jurídicos de la transición hacia la independencia mexicana, de 1808 a 1824 y, en específico los desarrollos regionales sobre ese particular, nos sentimos halagados por varias razones.

En primer término la coincidencia de enfoque a dar importancia a la perspectiva regional de la historia patria y, consecuentemente, al necesario y poco agotado análisis de la evolución, durante ese tiempo, del derecho positivo local; en segunda instancia, el hecho de que perteneciendo, como miembro de número, a la Academia de Historia Potosina y siendo abogado, se nos diera la oportunidad de seguir desarrollando investigaciones y divulgación sobre la dinámica del derecho potosino, especialmente cuando sujetos a ese empeño, en 1990 trabajamos un análisis
en el importante proyecto para la primera constitución potosina y, en 1992 otro, a propósito de la administración pública en San Luis Potosí, de finales del siglo XVIII y de principios del XIX, enfocado al rescate y estudio de algunas bases jurídicas que sustentaron la actividad del Ayuntamiento y su cabildo, durante la época de la Intendencia; tema conocido, pero poco investigado en su parte jurídica.

Así el antecedente, nos hemos animado a intentar cubrir en este estudio precisamente la laguna que se da respecto de la evolución del derecho público en San Luis Potosí, entre las épocas mencionadas, que fueron objeto de nuestro interés e investigación.

I. DERECHO PÚBLICO POTOSINO A FINALES DEL VIRREINATO (LA INTENDENCIA POTOSINA)

El derecho público, en contraposición del privado, manifiesta su calidad y alcances desde Ulpiano.1 En efecto, el ius publicum del derecho romano diferencia claramente uno del otro; sobre esta línea de enfoque, los sistemas del derecho moderno y contemporáneo de la raíz latina, marcan la diferencia mencionando que básicamente las normas de la Constitución, las leyes administrativas, los códigos penales, la mecánica procesal y el derecho internacional son derecho público.2 El mencionar lo

1 Jörs, P. y W. Kunkel, Derecho privado romano, Barcelona, Editorial Labor, 1965, p. 79, trad. de L. Prieto-Castro y Ferrandiz, citando a Ulpiano (D. 1, 1, 1, 2): “ius publicum est, quod ad statum rei romade spectat; privatum, quod ad singulorum utilitatem spectat”.

2 En este mismo sentido diversos tratadistas contemporáneos al señalar el tema en obras y libros de texto, a saber: Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho, 9a. ed., Buenos Aires, Editorial Universitaria, 1970 (trad. de la edic. francesa de 1953), quien manifiesta: p. 50 “El derecho que constituye el objeto de la ciencia jurídica es el derecho positivo, ya se trate de un derecho particular o del derecho internacional”, y sigue pp. 180-181, “la distinción entre derecho público y privado tiene una importancia esencial en la moderna ciencia del derecho, pero hasta hoy no ha sido posible lograr una definición satisfactoria de esa diferencia. Se la considera en general como un principio de clasificación de las relaciones jurídicas. El derecho privado sería una relación entre dos sujetos iguales y el derecho público una relación entre dos sujetos, uno de los cuales estaría subordinado al otro...”; García Márquez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho, México, Editorial Porrúa, revisada 1970, cf. p. 96 (como clasificación desde el punto de vista de su ámbito material de validez), y pp. 131-135 (manifiesta los enfoques como el del derecho romano, concepción conocida como la de la “Teoría del interés en juego”, la que por cierto crítica, comentando además que, sobre este tema algunos autores como J. Hollinger en El criterio de la oposición entre derecho público y derecho privado exponen: “104 teorías acerca del indicado tema...”), más adelante, p. 135 indica: “...hay que aceptar que la distinción carece de fundamento, desde el punto de vista teórico, y sólo posee importancia práctica, primordialmente política”. Señala definiciones para el derecho constitucional, el penal, administrativo, procesal e internacional público. Con enfoque parecido Recasens Siches,
anterior dejará claro que —por exclusión— todas aquellas normas jurídicas y regulatorias y las de sanción que no forman parte de las manifestadas son, en su ámbito material de validez, integrantes del denominado derecho privado; en tal virtud, el objeto de nuestra atención será sobre las primeras normas, las de derecho público, y su evolución local durante el periodo de nuestro interés.

Entrando en materia y comentado lo anterior, observamos que el hilo conductor son las fuentes escritas; en efecto, las noticias históricas por crónicas y estudios sobre el tema de la evolución del derecho durante la colonia manifiestan infinidad de enfoque para entender la utilización del derecho castellano y el propiamente indiano, y cómo ese sistema jurídico fue transformándose al paso de los siglos que duró la dominación española, hasta la consumación de la independencia.

Ots Capdequi, historiador contemporáneo señala, a nuestro juicio acertadamente, que el derecho en América o indiano pronto presentó, como rasgos más característicos los siguientes:

un casuismo... se legisló... sobre cada caso concreto y se trató de generalizar, en la medida de lo posible, la solución sobre cada caso adoptada; una tendencia asimiladora y uniformista. Se pretendió desde la metrópoli, primero por los monarcas de la Casa de Austria, y más todavía por los de la Casa de Borbón, estructurar la vida jurídica de estos territorios con visión uniformadora y tratando de asimilarlos a las viejas concepciones peninsulares...; una gran minuciosidad reglamentista. Los monarcas españoles quisieron tener en sus manos todos los hilos del gobierno de un mundo tan vasto, tan complejo y tan lejano... comprendían la dificultad que esto ofrecía, y movidos por la desconfianza en sus autoridades coloniales, multiplicaron las instrucciones de gobierno y complicaron extraordinariamente los trámites burocráticos y administrativos.4


Así, en el siglo XVIII se darán, en lo administrativo y político, grandes reformas con el advenimiento de la Casa de Borbón; soporte de esta metamorfosis será precisamente la figura denominada intendencia con sus efectos políticos y jurídicos.

En San Luis Potosí, es importante mencionarlo, el quehacer jurídico—como sucedía en otras partes de la Nueva España—se complementó en algunas épocas, con la investigación doctrinal y la enseñanza pública o privada del derecho, según lo afirma don Rafael Montejano y Aguiñaga, quien así lo manifiesta en una publicación denominada: De los estudios del derecho en San Luis,5 en la que nombra inclusive a algunos religiosos de gran capacidad y criterio jurídico, autores de obras específicas en temas de derecho.

Desafortunadamente hubo periodos en los que la enseñanza pública del derecho no se dio, cual fue el caso de los inicios de la Intendencia (1787 a 1823), toda vez que a razón de la expulsión primera de los jesuitas en 1767, los estudios superiores dejaron de prestarse, obligando a los interesados en ellos a buscarlos en otras partes del país e incluso en el extranjero.

Durante la intendencia potosina,6 periodo que inició con el nombramiento como corregidor intendent del doctor Bruno Díaz de Salcedo, dado por el rey en octubre 25 de 1787, se abrió un panorama jurídico complementario al existente. En efecto, la misma justificación del nuevo

5 Trabajo presentado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en octubre de 1953, a propósito de una exposición de bibliografía potosina exclusivamente sobre temas de jurisprudencia; obra publicada con el mismo título por Fichas de Bibliografía Potosina II, julio-octubre de 1955, 4-5, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S.L.P. (78-81), de la que desprendemos para citar textualmente el siguiente párrafo: “El estudio de la justicia y del derecho en San Luis Potosí no es cosa de este siglo (XX), ni del pasado. Hoy se estudia aquí, en los novísimos claustros de esta Facultad; ayer se estudiaba en los vetustos claustros de los conventos. Y no es hipótesis. A poco de la fundación de la ciudad, el franciscano Juan de Ayala, doctor en cánones por la Sorbona, compuso una obra: “Opus Canonicum Morale”, la primera obra jurídica escrita en San Luis, cuyo original vio el cronista Arlegui; fray Luys Hermoso, graduado en la Universidad de Bolonia, la que “sobre todas, de leyes el derecho es la fontana”, escribió también aquí su: “Alegación en favor de los indios de San Sebastián del Venado sobre su derecho a las tierras y aguas que poseen”. Otro franciscano, fray Pablo de la Asunción escribía hacia 1701 y en el mismo convento su tratado: “Disertación teológica moral sobre que no pecan los mineros que diezman las platas de rescate en perjuicio del real derecho del quinto”. Otros autores de la misma religión, fray José de Guadalupe Prado y fray Francisco Calvo, ambos lectores de cánones en el mismo serráfico convento, también escribieron sobre derecho; aquél, hacia 1733 compuso su: Tratado canónico de la justicia y del derecho, éste hacia 1802, sus: Elementos de derecho canónico.

sistema gubernamental dio la pauta. “El fundamento legal de la Intendencia tiene su origen en la estrategia política económica de centralizar aún más el control, limitando y consecuentemente quitando poder al mismo virrey y sobre todo a los alcaldes mayores, muchos de los cuales, por tener intereses creados en sus lugares, habían propiciado una autonomía, a veces en perjuicio del fisco”.

Seguramente por lo indicado fue que los intendentes eran, al menos en teoría, personajes muy identificados con la gran burocracia de la metrópoli, administradores y políticos probados dentro de una larga carrera al servicio de la administración pública, con gran movilidad y, sobre todo, fieles a la estructura de la Secretaría Universal de Indias.7

Es importante precisar que el derecho indiano de finales del siglo XVIII, y específicamente el de la Nueva España, no fue clasificado como la doctrina contemporánea lo hace; de hecho, quienes en esa época estudiaban la abogacía lo conceptualizaban a partir de diversas fuentes, siendo las más socorridas las denominadas recopilaciones de tratados específicos, leyes y principios, las que a su vez quedaban instrumentadas como resultado de un quehacer propiamente legislativo derivado de autoridades diversas, empezando por el monarca en turno vía reales cédulas, ordenanzas, decretos, bandos y otros cuerpos legales, que de alguna manera se fueron identificando al paso del tiempo, según la materia regulada, como normas de guerra, hacienda, actividad administrativa, control de alcabalas, vacuna, derecho civil, criminal, etcétera.

En la Nueva España durante las postrimerías del siglo XVIII —y consecuentemente en San Luis Potosí— el concepto derecho constitucional no existía, toda vez que ése tuvo su origen más preciso durante el desarrollo de la Ilustración (pero más como quehacer filosófico y de corrientes políticas), y apenas repuntaba, para justificar el concepto de soberanía, trasladado al pueblo y no como monopolio de soberanos. El enfoque constitucional, sin embargo, al menos en la teoría y consecuentemente en la doctrina jurídica que algunos estudiosos razonaban, se identificaba como ley suprema, superior y fundamental, que definiera formas de gobierno con sus límites; esquema administrativo de autoridades y, de ello la derivación de todo un sistema jurídico. Por otra parte, el concepto constituciones (en plural) sólo se conocía y había aplicado como ordenamiento superior, cual fue el caso para el uso de ciertos organismos y de la Uni-

7 Motilla Martínez, Jesús, op. cit., p. 67.
versidad Real y Pontificia de México; en efecto, existieron, desde el siglo XVI, constituciones para esa universidad.

Otro caso de uso del concepto, incluso más antiguo, fue el de los ordenamientos superiores de algunas congregaciones religiosas, también llamadas constituciones; otra fue el de las constituciones para las universidades de comerciantes, o consulados, también llamadas ordenanzas.8

Como antecedente recordamos que a los juristas, políticos e ideólogos de la época que nos ocupa, dedicados al análisis de la evolución de esquemas de gobierno y las actividades de autoridad, reguladas por el derecho positivo existente o en formación, se les empezó a denominar publicistas, no debiendo confundirse este concepto con su alcance contemporáneo más identificado con la mercadotecnia. Esos intelectuales, a veces activistas muchos de ellos europeos, influidos por los enciclopedistas del Siglo de las Luces, fueron los que a través de escritos o acciones empezaron a desarrollar, dentro de la teoría del Estado, el concepto de posibilidad o urgencia de monarquías constitucionales y, consecuentemente, la apreciación de las bondades de cuerpos colegiados denominados congresos o cortes, en las que sus participantes serían los que representaran a sectores geográficos y/o a giros específicos, nombrados a partir de sistemas de selección, donde capacidad probada y respeto público tendrían peso específico. A estos representantes —porque la idea prosperó— los veremos, al iniciarse el siglo XIX, identificados como diputados a Cortes.

Pero regresemos a los finales del siglo XVIII. Se puede manifestar que las normas jurídicas del derecho público en San Luis Potosí, se fueron dando básicamente en lo administrativo y fiscal. En efecto, a partir de la instauración de la intendencia, fueron tres los cuerpos legales que destacan, relacionados precisamente con la administración del ayuntamiento y su cabildo, cuyo más alto funcionario fue el intendente, auxiliado básicamente por un teniente letrado asesor, además de alcaldes ordinarios, regidores ministros (incluyendo al escribano), y otros de jerarquía y funciones diversas.

Por orden cronológico dichos cuerpos legales fueron:9 el Bando de Buen Gobierno de 1790, atribuido al intendente Bruno Díaz de Salcedo;

9 Para mayor detalle sobre estos cuerpos legales cf. nuestra obra cit.: “La Administración
la "Ordenanza de la División de la muy noble Ciudad de San Luis Potosí en Cuarteles. Creación de los Alcaldes de ellos y Reglas de su Gobierno, dada y mandada observar por el Exmo. Señor Marqués de Branciforte", de 1794, y ya en el siglo XIX, en 1806 (todavía época de la Intendencia): "Las Ordenanzas que debe guardar la Muy Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí", redactadas por don Juan Mariano de Vildósola, regidor que fue del ayuntamiento potosino y que se sustentaron tomando como modelo las de Puebla, en lo aplicable, habida cuenta que así había sido la recomendación en el documento de título de ciudad.

De esos cuerpos legales, cuyo alcance es de derecho público, se derivan normas positivas mezcladas en razón de su ámbito material de validez; en efecto, ese quehacer legislativo consideró temas propiamente administrativos, penales, fiscales y otros.

En forma enunciativa y no limitativa, mostramos ejemplos de lo aser- verado:

1. **Bando de Buen Gobierno (1790)**

Temas de administración:

- Compromiso de administrar recta justicia (artículo 1).
- Toque de queda (artículos 5 y 6).
- Prohibición de ruido y juegos; licencias (artículo 7).
- Reubicación fábrica de cohetes (artículo 8).
- Reglas de horario para tabernas (artículo 9).
- Reglas para el manejo en las calles, de mulas, caballos y otras bestias (artículo 13); [se antoja antecedente de una reglamentación de tránsito].
- Cuidado de casas (artículo 14).
- Reglas para alcantarillado y caños (artículo 16).
- Reglas a vendedores (artículo 18).
- Regulación sobre lugares de venta (artículos 19 y 20) [existía el problema de vendedores ambulantes].
- Regulación para cargadores (artículo 23).
- Registro de bienes (artículo 26); [¿registro público de propiedad?]

Tiemnas penales:

- Prohibición de ciertas armas; su regulación (artículo 3).
- Prohibición de ventas de armas a negros, indios, loros, zambos y mulatos (artículo 4); [se manifiesta el reconocimiento de castas y cierta reserva a su potencial peligro].
- Penas por violar toques de queda (artículo 6).
- Multas por violación horarios tabernas (artículo 9); [inclusive arreto y sumaria].
- Vagos (dice bagos) y ociosos (artículo 10).
- Penas por violación reglas para el manejo en calles (artículo 13).
- Multas por no levantar bardas en solares urbanos (artículo 17).
- Violación a reglamentación de mercados (artículo 19).
- Prohibición de usura (artículo 25).
- Control de comercio (artículo 28).
- Control del vicio de embriaguez (artículo 30).
- Control del vicio de “lascivia”; tutela de la moral de la prohibición (artículo 31).

Temas fiscales:

- Licencia para juegos pirotécnicos y otros, así como obligación de comprar en el monopolio de autoridad, el azufre, la pólvora y salitre [si no se compraba esa mercancía bajo el control de ella, se presumía defraudación]; (artículo 7).
- Uso de pesas y medidas (artículo 11), [basado en la ley 18, libro 4o., título 18 de la Recopilación de Indias, en esa época en vigor].
- Compra de materia prima de panaderos; precios y registro de transacciones en la alhóndiga; estricto control para evitar fraude a la Hacienda (artículo 21).
- Registros varios (artículo 26); [censo, cobro de impuestos, derechos, etcétera].
• Registro específico de marcas de ganado (artículo 27).
• Que no hubiera locales clandestinos (artículo 28); [para efectos de cobro fiscal].
• Libro de registro de multas y condonaciones (artículo 33).

Temas procesales:

• Recta justicia; jueces especiales, territorialidad (artículo 1).
• Detalle de jurisdicción (artículo 2).

2. Ordenanza de la División de la muy noble... (1794)

Temas de administración:

• Quiénes han de ser jueces de los cuarteles mayores (artículo 2).
• Sustitución de jueces por ausencia o enfermedad de titulares (artículo 3).
• Los cargos no pueden excusarse a ser servidos (artículo 4).
• De los alcaldes de barrio (artículo 5).
• Sistema de supervisión, vía informes (artículos 6 y 7).
• Selección de alcaldes; sus calidades y mecánica de posesión de puestos (artículos 8, 9 y 10).
• Que no se agasajen al entrar o salir (artículo 11).
• Escribanos (artículo 12).
• “Partes” de alcaldes de barrio a jueces mayores (artículo 17).
• Auxilio entre alcaldes (artículo 21).
• Libro de registros (artículo 22).
• “Padrón” (artículo 23).
• Obligación de dar aviso a las autoridades respecto a cambio de domicilio (artículo 25).
• Promoción de la industria (artículo 29).
• Vigilancia, aseo y cuidado de calles (artículo 32).
• Sobre basureros públicos y comunes (artículo 35).
• Sobre lotes baldíos (artículo 38).
• Aplicación de multas (artículo 40).
Temas penales:

• Contra el cohecho a autoridades (artículo 11).
• Alguacil y rondel de alcaldes de barrio (artículo 13).
• Alcaldes de barrio; gozan de jurisdicción criminal bajo ciertas reglas (artículo 14).
• Vigilancia en las rondas, delitos posibles (artículo 16).
• Pesquisas prohibidas (artículo 18); [este artículo asoma semejanza con actuales derechos constitucionales, al prohibir extralimitaciones so pretexto de investigación, especialmente cuando se trataba de denuncias anónimas].
• Contrabando y delito de soldados (artículo 20); [aclara jurisdicción de fueros diferentes].
• Vigilancia de holgazanes y oficiales que no trabajen los lunes (artículo 30); [el vicio del “san lunes” existía y estaba penado].
• Persecución de robos, borrachos y juicios (artículo 31).

Temas fiscales:

• No hay en este cuerpo legal artículo preciso que manifieste obligaciones fiscales, pero por extensión algunos de ellos tocan temas respecto a pagos a autoridades como multas, derechos y otros.

Temas procesales:

• Justificación a la división de la ciudad, para efectos jurisdiccionales (artículo 1).
• Jueces (artículo 2).
• Sustitución de ellos (artículo 3).
• Relación entre jueces y alcaldes (artículo 6).
• Con qué escribanos han de actuar los jueces de cuartel mayor y menor (artículo 12).
• Jurisdicción criminal (artículo 14).
• Sumarios de alcaldes, sobre visitas a la cárcel (artículo 15).
• Pesquisas (artículo 18).
• Auxilio de alcaldes, respetando sus jurisdicciones (artículo 21).
• Reglas para cuidar jurisdicciones (artículo 36).
• Control de multas, dando cuenta de ellas al juez principal (artículo 39).

Aclaramos que “aunque la ordenanza que nos ocupa, tuvo por jurisdicción a la ciudad de San Luis Potosí y algunos pueblos —posteriormente sus barrios— que formaban parte del partido o subdelegación que les identificaba, no parece ser remoto que algunos de los temas tratados en dicho cuerpo legal, sirvieran de base o ejemplo, para normar la administración pública de otras comunidades pertenecientes a la Intendencia potosina”.10

Respecto de la tercera ordenanza indicada, no manifestamos comentarios por tratarse de un cuerpo legal realizado hasta 1806 y que, aunque fue durante la época final de la intendencia cuando se elaboró, en realidad no es trascendente, porque fue tardía su promulgación; en efecto, dicho cuerpo legal debió haberse formado desde —nada menos— 1656, al concederse el título de ciudad al pueblo y minas de San Luis Potosí. Así “terminó el siglo XVII y el XVIII, y se desconoce que se hubiera intentado elaborarlas, o que fueran requeridas por la Corona. Por otra parte, la forma en que se desempeñó el Ayuntamiento en sus diversas etapas, incluyendo la de Intendencia, hace suponer que dicho cuerpo legal no hizo falta”;11 no dejará sin embargo, de reconocerse que, finalmente, la ciudad tuviera sus ordenanzas, lo que da una idea sobre la mentalidad de las autoridades de apegarse a lo tradicional.

Concluyendo, por lo que se refiere a la etapa última del siglo XVIII en San Luis Potosí, a propósito de los alcances del derecho público que le reguló, observamos que éste pudiera, por su origen, clasificarse en tres bloques:

a) Cuerpos legales diversos y generales cuya materia y alcance, hoy reconoceríamos como derecho público y que tuvieron su origen legislativo desde fuera del territorio potosino (derecho tradicional vigente).

b) Cuerpos legales específicos que, a diferencia de los anteriores, fueron el soporte de todas las reformas borbónicas y que propiciaron el es-

11 Idem, p. 139.
quema político-jurídico de intendencia, destacando, por mencionar uno de los más importantes, la *Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincias en el Reino de la Nueva España*, de 1788.

c) Cuerpos legales nacidos del seno de la intendencia y que, en el caso específico, por lo que trata de la potosina, son los que hemos enunciado.

Por otra parte consideramos que es importante indicar, que la transición del siglo XVIII al XIX en San Luis Potosí, por lo que se refiere a cuestiones político-jurídicas, en poco se diferenciaba a lo que sucedía en otras intendencias de la Nueva España; sin embargo, el caso potosino debe apreciarse a la luz de circunstancias específicas. En primer término la evolución local que tuvo el régimen de intendencia. Seguidamente, el hecho de que la abogacía como profesión se encontraba en manos de personas que habían obtenido su grado fuera de San Luis y, por ello la influencia que en los mismos tuvieron los enfoques de las universidades a las que asistieron, la de sus profesores y, en algunos casos, la experiencia forense desarrollada en otros lugares y, finalmente, la existencia de intelectuales, abogados algunos, que si bien no conformaban formalmente un grupo que les identificara, brillaron por sus capacidades y sobre todo por su criterio político jurídico. De estas circunstancias propias del caso potosino daremos nuestra opinión.

Las crónicas y de la época manifiestan que la evolución de la Intendencia potosina fue crítica —lo que igual sucedía en otras—, porque un cambio siempre es difícil de asimilar. En efecto, de la teoría borbónica a la práctica local hubo grandes distancias y este nuevo modelo impuesto desde la metrópoli, con todo el rigor y fuerza de lo obligado, si bien tuvo aciertos, se distinguió por errores derivados de un efecto que nunca se consideró.

Por una parte su establecimiento:

terminó con el poder y la corrupción de algunos alcaldes, pero no pudo debilitar la fuerza de grupos oligárquicos, al menos en San Luis Potosí, que de alguna forma pudieron incrustar a algunos de sus representantes en los cabildos de los ayuntamientos que empezaron a funcionar bajo la modalidades del esquema de intendencias; y no podría ser de otra manera, cuando éste, para cristalizarse, descansó en un fundamento teórico-legal y en el nombramiento de intendentes y tenientes letrados seleccionados en España quienes,
de pronto, se encontraron ante la realidad de enfrentarse a jurisdicciones territoriales sumamente extensas y comunidades que poco a poco conocían, en las que por supuesto, había intereses creados de grupos locales importantes.\(^{12}\)

El derecho positivo público tuvo entonces, por necesidad, debilitamiento en su aplicación, dadas las circunstancias políticas locales. También es importante manifestarlo, la “maraña” de jurisdicciones dio pauta, no obstante la existencia teórica de métodos interpretativos, para que el derecho no siempre fuera objetivamente utilizado. Hubo incluso, confrontación de leyes, muchas que por ser antiguas estaban superadas y su efectividad era modesta; pero lo más grave fue que las reformas borbónicas dieron pauta para debilitar el existente sistema jurídico político del virreinato, cuando permitieron o propiciaron conflictos jurisdiccionales, muchas veces graves por sus alcances. Así, desde 1761, año en que inició José de Gálvez su estancia primera en la Nueva España, y a raíz de su visita al noroeste de la colonia, se aceleró un proceso de conflictos jurisdiccionales que agravaron los existentes, a partir del nombramiento de militares de alto rango, a cargo de las denominadas provincias Internas, especialmente por el hecho de que aquéllos también tenían facultades administrativas y no sólo exclusivas de su fuero.

Gálvez propició y fortaleció, vía nombramiento de comandantes inspectores, un esquema paralelo de autoridad, compitiendo agresivamente con el del modelo virreinal. Estos comandantes generales tuvieron facultades no sólo militares, sino policías, económicas y judiciales; en adición a lo anterior, se impuso el esquema de intendencia, cuyo origen y justificación fue la gran estrategia político-económica de centralizar totalmente el control y aún más, limitando y consecuentemente quitando poder al mismo virrey. Dado ese panorama, no es difícil entender que el derecho positivo, especialmente el público, se subjetivizara en su aplicación. Sin embargo, no todo fue caos; de hecho, como lo hemos indicado, la intendencia tuvo aciertos: uno de ellos fue su quehacer legislativo. Por otra parte, no debe soslayarse el papel importante de políticos, algunos abogados por cierto, que destacaron en la actividad jurídica local, así como otros que además de juristas eran intelectuales humanistas, cuya formación se dio por estudios superiores fuera de San Luis Potosí, paralelamente con su preparación para el sacerdocio. Casos como éste están

\(^{12}\) *Idem*, p. 179.
representados, entre otros, por el del doctor Gorriño y Arduengo quien, años después, elaboraría el proyecto que sirvió de base a la primera constitución potosina, y que además restableció la enseñanza de estudios superiores, al fundar y ser el primer rector del Colegio Guadalupano Joséfino, en donde por supuesto, se impartió la cátedra de derecho.

Otro ejemplo, aunque de un sacerdote que no fue potosino de nacimiento, es el caso del doctor Tomás Vargas, quien fue diputado representante de San Luis Potosí ante el Congreso Constituyente, e incluso presidente de éste. A él le tocó entregar al presidente Guadalupe Victoria, la Constitución elaborada por ese supremo organismo.

Hubo, por supuesto, otros protagonistas que mucho tuvieron que ver con el quehacer del derecho positivo público, convirtiéndose en los "publicistas" de las dos primeras décadas del XIX en San Luis Potosí, y que veremos muy activos durante el proceso de trasformación hacia el federalismo, después de la caída del imperio de Iturbide.

Antes de ubicar la situación local al inicio del siglo XIX, recordaremos las circunstancias de esa época que vivía la Nueva España y la metrópoli por lo que a derecho público se refiere. Aunque la evolución del mismo continuaba y aparentemente evolucionaba, el esquema mismo del sistema jurídico resultaba, en su aplicación, rígido y proclive a un quehacer burocrático y excesivamente formalista; de hecho, los juristas de esa época desarrollaban su actividad, descansándola en un impresionante sistema que fue acumulando al paso de los siglos, tal cantidad de cuerpos legales, que su manejo e interpretación implicaba una obra titánica. Sobre este particular es interesante indicar que, para facilitar a los juristas su función hubo recopilaciones, destacando la de don Juan Salas, catedrático de la Universidad de Valencia, España.

"Cuando se alcanza la independencia de la Nueva España, la masa esencial del viejo derecho castellano e indio se estudiaba por la Ilustración del derecho real de España, aparecida en 1803... era uno de los primeros manuales que se había escrito sobre el derecho patrio o real..." 13 Hubo antes, otras recopilaciones; sin embargo, ésta tuvo gran aceptación en el mundo académico de la época y como material de consulta. Dicha obra —en varias ediciones— se difundió en México, pareciendo la primera de ellas, bajo su nombre original, pero "añadiendo: Reimpresión

13 Peset, Marino, Novísimo Sala mexicana o el final del derecho hispano, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el t. II de la Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, 1988 (895-913). La cita que transcribimos es la de la p. 895.
con anotaciones relativas a la jurisprudencia de México, dirigido por J. M. Sánchez de la Barquera, en tres volúmenes en octavo, México, 1807-1808; tenía (dice el autor Peset) muchos añadidos, para mejor adaptarse a Indias, procedentes de leyes de recopilación de 1680 y de la colección de Beleña (cita 5: Ventura Beleña, E., *Recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta Nueva España*, 12 vols., México, 1787).14

En San Luis Potosí, sin embargo, la aparente influencia que pudiera haber tenido el uso de la recopilación indicada es remota, habida cuenta, como lo hemos señalado, de la ausencia de una institución de estudios superiores en las que se impartieran cátedras de derecho. Los abogados de esa época fueron formados fuera del territorio potosino en universidades o seminarios y sus capacidades, generalmente probadas, tenían que competir con la de autoridades civiles y militares, así como religiosas, las que en razón de su actividad específica aplicaban el derecho positivo, las más de las veces con tendencia burocrática y toda la fuerza política que les respaldaba. Por supuesto a esa tendencia en la aplicación de la ley hubo excepciones y ellas están representadas en el quehacer de algunos personajes, de los que hay ejemplos varios; es importante manifestar que su vinculación con la aplicación objetiva del derecho, los llevó a reflexionar en la necesaria dinámica del mismo, dada la imperiosa urgencia de legislar con enfoques más cercanos a la realidad y considerando a los cambios que la problemática social urgía. Este sentir no sólo era respecto del derecho en sí, sino de la consecuente modificación del sistema político.

Se ha pensado e incluso justificado, que el movimiento insurgente provocó inquietudes de cambio en el sistema de derecho. Ello, al menos en la intendencia potosina, no fue así, especialmente durante 1810 a 1820. Sobre este tema y época hay material escrito, producto de investigación histórica local.15

En efecto, no hubo originalmente cuestionamientos de cambios jurídicos soportados en la insurgencia, lo que no significa que la inquietud existía, especialmente en intelectuales activistas, simpatizantes de las

14 *Idem*, p. 896.
ideas publicistas emanadas de las Cortes de Cádiz; uno de ellos, en San Luis Potosí, fue el indicado doctor Gorriño y Arduengo, quien desde 1809 “obsequia petición del Ayuntamiento, a través de una contestación escrita en la que manifestaba sus puntos de vista sobre algunos temas públicos, que... fueron valiosas aportaciones para modificar las estructuras político-económicas”.

El derecho positivo no se cuestionaba como sistema jurídico; de hecho hacía sentido; sin embargo, había inquietudes de índole conceptual respecto de temas generales como: jurisdicciones, situaciones agrarias, aspectos fiscales, y otros. Estos enfoques no sólo eran locales, sino que coincidían con el sentir de personajes de la época que estaban vinculados con San Luis, como era el caso de algunas dignidades eclesiásticas ubicadas en Valladolid, recordando que entonces la Intendencia potosina, en lo religioso, dependía del obispado michoacano. Tal es el caso del obispo fray Antonio de San Miguel y su discípulo y auxiliar, Manuel Abad y Queipo, los que abiertamente, a través de textos, cuestionaron la necesidad de algunos cambios jurídicos, mayormente en materias que hoy consideramos de derecho público.

Existe mucho material documental, en proceso de ser analizado al detalle, en el Archivo Histórico de San Luis Potosí, institución benemérita, la que ha rescatado fondos como el de “Intendencia de San Luis Potosí”, “Real Hacienda” y “Poder Municipal” (ayuntamiento). De sus índices se desprende el quehacer cotidiano de la aplicación de materias diversas de derecho público, como son los ejemplos que a continuación manifestamos, del fondo que contiene asuntos de la jurisdicción del ayuntamiento.

16 Cf. Motilla M., en La administración pública..., pp. 161-164. Gorriño “consideraba las leyes existentes como buenas, aunque criticaba el exceso de ellas, lo que confundía a la población y provocaba actos de interpretación por particulares, cuando esa tarea tocaba sólo al soberano”.

17 Cf. Margadant S., Guillermo F., “El pensamiento jurídico de Manuel Abad y Queipo”, Cuadernos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, año 2, núm 4, enero-abril de 1927, Cf. Juárez Nieto, Carlos, “Los orígenes del pensamiento liberal-burgués en Valladolid de Michoacán (1808-1828)”, el Relax y la Rosa, Morelia, año 1, 1990, núm 2(68-70), quien apunta p. 69: “Los escritos o representaciones que Abad y Queipo formó son fiel reflejo del influjo que el liberalismo —en su fase socioeconómica— estaba ejerciendo en las mentes más lúcidas de Valladolid y la Nueva España. La representación de 1799 que se oponía a las pretension de la Corona española por afectar el fuero eclesiástico, va más allá del alegato justificatorio de la iglesia michoacana en favor de su inmunidad, puesto que el asturiano (Abad y Queipo) ‘su autor, se da tiempo de exponer al monarca las difíciles condiciones en que la economía y la sociedad novohispana se encontraban’” y en p. 70: “El crítico pensamiento del canónigo villasoleano se vuelve a hacer presente en octubre de 1805, cuando escribió, a nombre de los labradores y comerciantes de la Intendencia, una representación dirigida al virrey Iturriagray, en la que exponía los inconvenientes de que se aplicara en la Nueva España la ley de consolidaación”.
### Años

<table>
<thead>
<tr>
<th>Año</th>
<th>Materia fiscal y económica</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1798-1814</td>
<td>Cuentas de las obras de las casas reales de esta ciudad.</td>
</tr>
<tr>
<td>1807 (22 de mayo)</td>
<td>Dictamen sobre el sello de la ciudad, dibujo y explicación del escudo de armas; que se nombra al regidor comisionado de Tlacos.</td>
</tr>
<tr>
<td>1808</td>
<td>Libro de conocimientos donde consta el giro que se da a los escritos (sic) del juzgado militar de San Carlos.</td>
</tr>
<tr>
<td>1813-1814</td>
<td>Cuentas que acreditan el cobro hecho a los cargos extraídos (sic) en el último convoy (sic) para Querétaro.</td>
</tr>
<tr>
<td>1814</td>
<td>Cuaderno del cobro de impuestos del 2% de los efectos introducidos en el presente año.</td>
</tr>
<tr>
<td>1815</td>
<td>Sobre arbitrios para colectar moneda mexicana con que socorren a la tropa que hace expediciones para donde no se admite la provisional.</td>
</tr>
<tr>
<td>1816</td>
<td>Averiguación del paradero de los reales pertenecientes a los fondos de propios y pósito.</td>
</tr>
<tr>
<td>1816</td>
<td>Cuaderno del impuesto del 2% de la ciudad.</td>
</tr>
<tr>
<td>1817</td>
<td>Cuaderno de impuestos municipales.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Otros ejemplos son la diversidad de bandos, muchos de ellos relacionados con el aspecto de temas políticos y ejecutivos-judiciales, bajo enfoque jurídico “Fondo Intendencia”.

### Año

<table>
<thead>
<tr>
<th>Año</th>
<th>Materia y contenido</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1810-1811 (enero 9, 1811)</td>
<td>Bandos y órdenes firmados por el virrey Venegas. Se remite el bando que inserta la Real Orden del 26 de agosto de 1811, que previene la sustanciación de las causas de infidencia.</td>
</tr>
<tr>
<td>1811 (abril 2)</td>
<td>Se acompaña el bando que inserta el Real Decreto, por el cual (sic) se previene a los habitantes de América puedan sembrar y cultivar quanto (sic) la naturaleza y el arte les proporcionan para el fomento de la industria declarando que los americanos, así españoles como indios, y los hijos de ambas clases, tengan igual opción que los españoles europeos para cualquier destino.</td>
</tr>
<tr>
<td>Junio 1o.</td>
<td>Se remite el bando, prohibiendo la circulación del periódico sedicioso “ilustrador nacional”, y de-</td>
</tr>
</tbody>
</table>
más papeles de esta clase que procuren esparcir los insurgentes.

Septiembre 23
Bando relativo al acuerdo del Consejo Pleno de Indias “que las substituciones de poderes para negocios de gracia o de gobierno, se hagan en agentes de número” (justicia).

Octubre 6
Se remite el bando que inserta el Real Decreto de 17 de abril, que manda que las personas que en lo adelante se promuevan a plazas del Supremo Tribunal de Justicia, han de ser letrados y de buen concepto público.

Octubre 10
Bando que inserta el Real Decreto por el cual se “convoca a Cortes ordinarias para el año de 1813, e instrucción conforme a la cual (sic) deberán celebrarse en las provincias de ultramar las elecciones de diputados de Cortes ordinarias de 1813”.

Así como los bandos indicados, para ilustración de las materias de su contenido, existen infinidad de otros publicados en San Luis Potosí y emitidos por los virreyes en turno, cual fue el caso de Calleja y Apodaca.

II. LAS TRANSFORMACIONES IDEOLÓGICAS EN MATERIA DE GOBIERNO Y DERECHO: EL IMPACTO DE LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Entender la metamorfosis que se inició durante las dos últimas décadas del siglo XVIII, respecto a cambios en materia de gobierno y derecho en el mundo occidental de esa época, es no perder de vista el debilitamiento del absolutismo y por contra, el fortalecimiento de las corrientes filosóficas liberales, gestadas, algunas de ellas, desde el triunfo de la Revolución francesa.

Sin embargo, hay autores contemporáneos que han precisado que esos cambios, especialmente los de los primeros años del siglo XIX, en España y sus colonias, no son de influencia francesa o resultado de imitación extralógica. En efecto, el motor del cambio fue, y ello es indiscutible, el quehacer de las Cortes de Cádiz y su obra: la Constitución expedida el 19 de marzo de 1812, como resultado de un trabajo iniciado desde el 5 de mayo de 1808.

El doctor en derecho José Barragán es precioso al manifestar: “...al comenzar sus tareas las Cortes extraordinarias, en el ambiente nacional
EL DERECHO PÚBLICO POTOSINO (1808-1824) 355

(de España) flotaban dos cuestiones sumamente importantes: la de hacer frente al invasor (francés) y, aprovechando la coyuntura, intentar reformar las leyes antiguas"\(^{18}\) y aclara, en cita: "...debe entenderse el intento de reformar la legislación tradicional en un sentido liberal. Es decir, intento por elaborar una constitución, y en definitiva constitucionalizar todo el sistema, quedando a salvo todas aquellas cuestiones... la religión, la de la monarquía, la de las Cortes, pero encuadradas ahora en el nuevo marco, verdaderamente revolucionario de la introducción de un Estado de derecho."\(^{19}\)

En América y muy marcadamente dentro de la intelectualidad de la Nueva España, el germen del liberalismo fue evidente, especial y protagónico entre los personajes enviados a esas Cortes como representantes diputados. Fue, en verdad, la oportunidad anhelada de plantear, en un foro público de gran trascendencia, lo que se pensaba respecto al derecho y al Estado. Y no sólo ello, fue la experiencia de coincidir con diputados de otras provincias americanas y de la península, en la urgencia de transformar el modelo de gobierno y de derecho.

En San Luis Potosí esas inquietudes se dieron desde que se publicitó la real orden, del 27 de enero de 1809, en la que la Suprema Junta Central solicitó al ayuntamiento potosino, se nombraran diputados por elección, a los que se instruiría promovieran actividades de interés público; uno de ellos, como lo hemos mencionado, fue el doctor Gorriño y Aduengo. Pero hubo más,\(^{20}\) que posteriormente recibieron la encomienda de trasladarse a España, a representar a la provincia potosina ante las Cortes de Cádiz, como sucedió con otros personajes mexicanos que a su vez representaron a otras provincias de México.\(^{21}\)

Pero mientras aquellos intentos sucedían en España y se trabajaba arduo hasta lograr la expedición de la Constitución Política, en México había estallado el movimiento insurgente y desde 1810 a 1821 correrían, en paralelo, el movimiento independentista y la búsqueda de un nuevo sistema político y consecuentemente jurídico.

\(^{18}\) Temas del liberalismo Gaditano, México, Universidad Nacional Autónoma de México, p. 4.

\(^{19}\) Barragán Barragán, José, op. cit., p. 4, su cita núm. 1.

\(^{20}\) Cf. Rodríguez Barragán, Nereo, "Los diputados a las Cortes de Cádiz en 1810 por la provincia de San Luis Potosí", Letras Potosinas, San Luis Potosí, núm. 77.

\(^{21}\) Destacaron, entre otros, el presbítero Ramos Arizpe por Coahuila; Mendiola por Querétaro; el presbítero Miguel Gordoa, diputado por Zacatecas; el canónigo Uriá por Guadalajara y Guridi y Alcocer, por Tlaxcala.
La expectativa de nuevas estructuras jurídicas era dual: por una parte, la oficial, identificada con las Cortes de Cádiz, y por la otra, la insurgente, que se reflejaría en los trabajos del Congreso de Chilpancingo (11 de septiembre al 6 de noviembre de 1813). Los documentos emanados, los más importantes, de ese Congreso, que después sesionó en Apatzingán, fueron: el Reglamento (basado en los elementos constitucionales de Rayón); el Discurso de apertura; Los Sentimientos de la Nación; La Declaración de la Independencia y el Decreto Constitucional de Apatzingán.

De la oficial San Luis Potosí no queda excluido; un impreso de la población de Armadillo (muy cercana a la ciudad de San Luis Potosí) anunciaba, en agosto de 1813: “se avisa que en la elección del 26 de julio de 1813, resultaron electos diputados a Cortes los señores José María Vivero, y licenciados Luis Mendizabal y Ramón Martínez; y el día 27 para la diputación provincial, licenciados Antonio Frontaura, Idelfonso Díaz de León, capitán Jacobo Ma. Santos y Andrés Pérez Soto”.22

Era la época de Calleja como virrey—tomó posesión de su cargo, el 4 de marzo de 1813— quien empieza a realizar una labor legislativa intensa para sanear las finanzas públicas y repudiar a los insurgentes.

Por contrapartida, el Congreso de Chilpancingo se instaura el 14 de septiembre del año indicado, y para el 6 de noviembre, decretó—lo que es muy significativo— restablecer en el país a la Compañía de Jesús.

Para 1814, en enero, terminó el Congreso insurgente sus sesiones en Chilpancingo y el 4 de mayo, Fernando VII ordena se anule la Constitución de Cádiz y reprime, hasta casi aniquilarlas, a las Cortes que habían venido trabajando en el seguimiento de dicha Constitución.

El 20 de diciembre Morelos es sentenciado a muerte, para ser ejecutado el 22.

El impacto de la Constitución de Cádiz, en paralelo, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, emitido por los insurgentes desde Apatzingán (22 de octubre de 1814), propiciaron entre los mexicanos ansias de democracia.

Años después y como consecuencia del pronunciamiento, en España, del coronel Rafael del Riego, se restituyó la Constitución de Cádiz y las

leyes de ellas emanadas que habían sido abolidas. En San Luis Potosí, junio 7 de 1820, a través de un bando del intendente se dio a conocer que la Constitución de Cádiz se restablecía y, 20 días después, un bando manifestó la instalación de juntas preparatorias para elegir, de nuevo, diputados a las Cortes; otra vez y con solemnidad se juró la Constitución, el 2 de julio, e incluso, para celebrar el evento, se erigieron algunos monumentos conmemorativos.

Resulta entonces interesante apreciar, cómo por vías diferentes se buscaba un cambio, en una época convulsa en la que no sólo hubo el enfrentamiento de una guerra civil, sino el de enfoques ideológicos que incluso, siendo de antagonistas, también tenían puntos de coincidencia; con lo señalado queremos precisar que durante la segunda década del siglo XIX, la tendencia liberal se dio no sólo entre los ideólogos insurgentes, sino entre aquellos que influidos por las Cortes de Cádiz representarían el sustento de una verdadera contrarrevolución.23

III. EL ENTORNO POTOSINO DURANTE EL PERÍODO DE LA INSURGENCIA

Tres días después del grito de independencia que en su parroquia diera el cura don Miguel Hidalgo y Costilla, el brigadier Félix María Calleja del Rey conoció, por noticia del virrey Francisco Xavier Venegas,24 de dicho levantamiento. Ese informe oficializó, en territorio potosino, la ges-

---
23 Contrarrevolución. Resulta urgente dar su peso específico al enfoque objetivo de algunos investigadores contemporáneos extranjeros, que nos han venido a demostrar, contra lo que señala u omite la llamada historia oficial, que la independencia mexicana nunca se hubiera consumado única y exclusivamente por una victoria armada de los insurgentes, la que de hecho nunca se logró totalmente, sino por el resultado de una contrarrevolución y las circunstancias históricas del debilitamiento de la monarquía española en su modalidad absolutista. Cf. Anna, Timothy E., The Fall of the Royal Government in Mexico City, hay trad. cast. en, México, Fondo de Cultura Económica, 1981; quien en p. 19 dice: “España, el poder imperial mismo, con su propia confusión de metas y sus contradicciones internas, fue lo que le señaló a los mexicanos el camino para reemplazar el régimen imperial por una forma de gobierno alterna”.

24 Francisco Javier Venegas de Saavedra, tenía los siguientes títulos: “Rodríguez de Arenzando, Guemes Mora, Pacheco Daza y Maldonado, Caballero de la Orden de Calatrava, Teniente General de los Reales Ejércitos. Virrey, Gobernador, y Capitán General de la Nueva España, Presidente de su Real Audiencia, Superintendente General; Subdelegado de la Real Hacienda, Minas, Azogue y Ramo de Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su Real Junta y Subdelegado General de Correos en el mismo reyno...”, cit. Juan N. Chavarrí.
ta insurgente. Para el 25 de octubre Calleja, habiendo recibido órdenes precisas, sale de San Luis para combatir a los rebeldes.

En escena y al fragor entusiasta de un movimiento revolucionario, algunos personajes locales toman posición y así, en la ciudad de San Luis Potosí se observa el inicio de la insurgencia, en la que los protagonistas fueron los legos Luis Herrera y Villerías, así como otros más, cuya actividad fue efímera habida cuenta el poco tiempo que duró. En efecto, poco representativo fue el movimiento insurgente local. Para enero de 1811 algunos protagonistas de la oposición virreinal merodeaban por territorio potosino. El 25 de febrero el lego Luis Herrera abandonó la ciudad, para ser derrotado, el 22 de marzo, en la llamada batalla del Valle de Maíz, por el realista Diego García Conde, quien le apresa, para fusilarlo en abril. El 11 de mayo se fusiló a otro levantado: José María Lanzagorta en Chihuahua y, en junio caen don Nicolás Zapata y don José Mariano Jiménez. El 31 de julio, Hidalgo y otros insurgentes fueron también fusilados, y pareciera que San Luis Potosí deja de tener injerencia como territorio en el que el movimiento insurgente manifestara fuerza.

De hecho, hasta la incursión de Francisco Xavier de Mina, es cuando vuelve a ser testigo de esta guerra civil, ya que ella se desarrolló, preponderantemente, en otros sitios del país.\footnote{Benítez, José R., \textit{Historia gráfica de la Nueva España}, México, Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados Unidos Mexicanos, 1968. Este autor concluye, respecto al movimiento insurreccional: “1° Que el movimiento..., siempre fue descendente, desde su iniciación hasta 1818. Las acciones de guerra, desde 1818 hasta mediados de 1820, sólo se interrumpieron en tres ocasiones, en que se celebraron funciones de armas de poca importancia, pudiendo, por tanto, considerarse como períodos de paz...”; “2° Que se verificó ésta, casi en su totalidad, en el territorio de los estados de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla y Veracruz. En los demás Estados, la acción de la insurgencia fue muy limitada, y en algunos nula...”} Así las cosas, San Luis sigue siendo —en apariencia— baluarte del realismo. Incluso, es desde su territorio, con Calleja a la cabeza, donde se reestructurará el esquema del ejército que cuidó los intereses españoles, lo que le valió a su organizador, el título de virrey. En efecto, el 4 de marzo de 1813, Venegas entregó a Calleja, su más fuerte rival político —a decir de varios historiadores— el bastón de mando.

Para esas fechas casi cumplía un año de expedida la Constitución de Cádiz, la que fue jurada en territorio mexicano el 30 de septiembre de 1812. El 26 de julio del 13 fueron electos, por San Luis Potosí y toda su provincia, diputados para las Cortes de España.
En San Luis Potosí, el movimiento insurgente, por lo que se refiere a actividad, según lo manifiesta don José R. Benítez, estudiado contemporáneo del tema, fue parcial.26

Sin embargo, de los insurgentes algo se escuchaba en la ciudad de San Luis Potosí, aunque las noticias oficiales minimizaban los aspectos ideológicos de ellos. Podría afirmarse que la gesta independentista despertó una clara conciencia de necesidad de cambios. La guerra civil, si bien aparentemente distante, afectaba en lo económico. "En la Nueva España, la revolución devastó los centros de producción minera (y en territorio potosino, ese era el caso) y privó al gobierno virreinal de la plata necesaria en la Real Casa de Moneda y de los ingresos normales producidos por las alcabalas..."27 Calleja —ya con investidura de virrey— para contrarrestar el déficit público impone a través de varios decretos, "préstamos forzosos" que poco gustaron a los criollos que en el país, y en territorio potosino, formaban la élite oligárquica. De hecho, un gasto constante fue el erogado para fortalecer al ejército realista. "Las medidas financieras ordenadas por Calleja afectaron gravemente a las ciudades controladas por los realistas, y de 1810 a 1815 la deuda nacional ( interna) del gobierno de México aumentó, de unos 36 a aproximadamente 50 millones de pesos, de manera que los insurgentes, aunque no lograron derrotar al régimen realista por medio de la insurrección armada, si lograron privar definitivamente al gobierno de sus fuentes de crédito".28

Dentro de algunas de las medidas forzosas impuestas por Calleja, destacaron las siguientes: 1813, 16 de marzo, continuar la contribución del 5% sobre arrendamiento de fincas; 8 de junio, que los bienes de la Inquisición y sus rentas se incorporasen a la Hacienda Pública; bando del 7 de julio para aumentar en un 50% el precio del tabaco; 13 de noviembre, junta de Calleja con el arzobispo, las autoridades y algunos particulares de la Ciudad de México, para tratar sobre la contribución directa; 11 de diciembre, bando de Calleja para bajar el precio del tabaco en un

26 Op. cit., p. 208. Se manifiesta que doce fueron el número de hechos de armas registrados en territorio potosino; en las pp. 285 a 299 expresa los lugares, a saber: Catorce (Real de) (mayo 6, 1811); Estanque Colorado (mayo 9, 1811); los Lobos (junio 8, 1817); Matamoros (junio 21, 1811); Peotillos, hacienda de (junio 15, 1817); Río Verde (Feb. 16 1812); y en el mismo lugar (febrero 23, 1812); San Francisco (febrero 11, 1811); San Luis Potosí (nov. 10, 1810); Valle de la Mañí (mayo 22, 1811); Villela (principios de septiembre de 1814).


50%; 16 de diciembre, bando para establecer una contribución directa sobre ventas y propiedades; 18 de diciembre, junta celebrada por Calleja con los individuos del comercio para obtener un empréstito, 1814, enero primero, se hipoteca la mitad de los productos de la Aduana de México; 23 de agosto, bando de Calleja para que circulase la moneda de cobre que había mandado acuñar; 14 de octubre, sobre contribución directa, 14 de noviembre, contribución del 10% sobre fincas urbanas.

Como se puede apreciar, en las poblaciones donde dominaron los realistas, especialmente los primeros años del movimiento insurgente fueron difíciles, por un lado, el comercio y la minería, y la agricultura y la ganadería estaban inhibidos, y, por otro, la imposición fiscal, la inflación (que como fenómeno económico se dio) y préstamos forzosos u obligación de recibir moneda de cobre afectaron, e incluso irritaron, a la población.

Las guerras cuestan y de España, por la situación que a su vez atraviesaba, poco apoyo o casi nulo se recibía. Sin embargo, con costo para el virreinato, se enviaron refuerzos. “Las primeras tropas procedentes de la Península no llegaron hasta el 13 de mayo de 1812 y fueron una fuerza de unos 3 mil hombres pertenecientes a los regimientos de Asturias y de Lobato”.

A la salida de Calleja como virrey, su sucesor de 1816 a 1821 fue don Juan Ruiz de Apodaca, premiado por Fernando VII como Conde del Venadito, por el éxito que tuvo su campaña contra Xavier Mina.

Hábil negociador, lo primero que hizo fue congraciarse con los insurgentes y modificar la tendencia fiscalista de su antecesor. En efecto...dijo principio a su gobierno aboliendo los impuestos de las recausas de guerra, y suprimiendo la deducción del 15% a los salarios del personal administrativo. Trató de nivelar a los causantes de la alcabala, dándose...

cuenta del resentimiento provocado por las medidas fiscales tomadas por el gobierno de Calleja”.

San Luis Potosí, durante todo el tiempo que duró el movimiento insurgente, en lo formal fue realista, y no podía ser de otra forma cuando todo el aparato de autoridad local, representando en la intendencia y su ayuntamiento era aparentemente fiel a España. Esta situación provocó que población y autoridades, así como grupos específicos, como religiosos, intelectuales y miembros de la oligarquía, así como algunos militares, estuvieran a la expectativa, hasta finales de 1820. Los realistas habían ganado, hubo amnistía general, pero el germen de una contrarrevolución era un hecho, y la paradoja es que ésta no sólo se soportaba en los nacionales, sino incluso en españoles peninsulares, muy cercanos al movimiento que puso fin al despotismo de Fernando VII y restauró el orden constitucional.

El historiador Martín Quirarte comenta: “entre los soldados enviados a México hay muchos francmasones que ayudarán más tarde a proclamar la independencia, ya bajo la bandera de Agustín de Iturbide”.

Del Fondo de Intendencia, del Archivo Histórico de San Luis Potosí, se obtienen las siguientes noticias de bando publicados durante los últimos meses de 1820, los que por su contenido dan idea sobre las tendencias políticas del momento; algunas de ellas relacionadas con el quehacer jurídico: agosto 22, bando que inserta la real orden: que se pongan en libertad a todos los presos y detenidos por opiniones políticas; septiembre 30, remisión del bando que inserta el real decreto que previene el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil; octubre 9, remisión del bando que inserta la real orden relativa a no caber juicio de conciliación en la cobranza de las contribuciones o créditos de la Hacienda Pública, quedando expedida la jurisdicción de la comisión apostólica del subsidio extraordinario y de sus subdelegados.

31 *Idem*, P. III. Apodaca ostentó los siguientes títulos: “Don Juan Ruiz de Apodaca y Eliza López de Letona y Lasqueti, Gran Cruz de las Reales Ordenes de San Fernando y San Hermenegildo, Comendador de Ballaga y Álgarga en la de Calatrava, y de la Condecoración de la Lis de Venté, Ministro del Supremo Tribunal del Altamirantazgo, Teniente General de la Real Armada, Virrey, Gobernador y Capitán General de la Nueva España, Presidente de su Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de Real Hacienda, Minas y Ramo de Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su Real Junta y Subdelegado General de Correos en el mismo reino”. Tomado de su proclama desacreditando la influencia de Mina en la guerra de independencia, dada en México el 12 de julio de 1817. *Cf.* A.G.N., Ramo de Bandos, t. 29, f. 82, impres.
Como se aprecia, cambios jurídicos saneaban o intentaban buscar soluciones, ante las expectativas no sólo de la población en general, sino de grupos que cada vez quedaban identificados como protagonistas de una contrarrevolución, que buscaba cambios políticos de raíz. Alto clero, ejército privilegiado y sobre todo la clase oligárquica de cada región iniciaron compromisos para acabar oficialmente la guerra civil a través de arreglos, los que conocemos se dieron y han quedado identificados como El Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba. Aparece entonces en la gran escena, Iturbide, personaje conocido por los potosinos desde que Calleja, antes de ser virrey, le había apoyado en su carrera militar. Él podía representar el anhelo de los integrantes de los grupos contrarrevolucionarios, impidiendo el establecimiento de un gobierno liberal.

El Plan de Iguala da la pauta; proclamado por Iturbide contiene 23 puntos, entre los que destacan:

1. Única religión, la católica.
2. Independencia del reino.
3. Gobierno monárquico constitucional.
4. Fernando VII, o los de su dinastía serán emperadores.
5. Se denominará Junta Gubernativa.
6. La Junta gobernará.
8. El gobierno será sostenido por el Ejército de las Tres Garantías.

...  

...  
20. Mientras se reúnen las Cortes, la constitución española procederá.

Siguió el Tratado de Córdoba, apareciendo en escena O'Donojú, lo que propició la idea entre los involucrados que la guerra civil terminaba en lo interno, mediante un acuerdo diplomático: el reconocimiento de la metrópoli se daba al esquema de solución. Sin embargo, no fue así:

... el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba significaban cosas distintas para diferentes personas. Para algunos significaban la creación de la autonomía, para otros la independencia, y para otros más constituían el reconocimiento español del estatus de un reino independiente dentro de algún tipo de comunidad de naciones o imperios aún no articulados. En el júbilo delirante que invadía al país, no se reconoció de manera general que México había iniciado
su existencia legal como Estado, sobre la base de dos documentos muy peca-
ulares que contenían un conjunto bastante problemático de premisas y que
ingualaban la simiente de amplios desacuerdos políticos.32

La independencia se consumó el 28 de septiembre de 1821; lo que su-
cedió en San Luis Potosí, fue lo que se sucintamente narramos a conti-
nuación:

Militares de la guarnición destacada en San Luis Potosí, se pronun-
ciaron por el Plan de Iguala. El coronel Echavarria fue designado por
Iturbide comandante general. Esta situación provocó que las autoridades
constituidas en el ayuntamiento cuestionaran su permanencia en él, pero
al mismo tiempo tenían que solidarizarse con el cambio político que se
daba en todo el país.

“Nombrada la regencia del Imperio e instalada la Junta Gubernativa,
el Ayuntamiento felicitó a don Agustín de Iturbide con un escrito...”33
ya anteriormente, el 3 de julio, “...en junta general de vecinos y cor-
poraciones civiles y eclesiásticas se acordó proclamar y jurar la inde-
pendencia; y con misa en acción de gracias celebró San Luis su in-
dependencia de España”.34

Don Manuel Jacinto de Acevedo dejó de ser intendente y la jefatura
política quedó en manos de don Juan María de Azcárate a partir de 1822.
Éste, a su vez, fue remplazado por don Juan José Zenón Fernández, quien
fue nombrado comandante general de la provincia.

IV. EL EFÍMERO PRIMER IMPERIO DE ITURBIDE: SU IMPACTO
EN SAN LUIS POTOSÍ

Iturbide miembro de la Suprema Regencia, su presidente, comandante
del Ejército Trigarante, generalísimo, almirante y alteza serenísima se
convirtió en el personaje que en esa época crucial el país necesitaba, “Era

32 Anna, Timothy E., El Imperio de Iturbide, México, Consejo Nacional para la Cultura y
33 Velázquez, Primo Feliciano, Historia de San Luis Potosí, San Luis Potosí, Archivo His-
34 Idem, p. 133.
el pilar de la armonía social, la unidad y la paz"). Por lo dicho, no fue difícil que el 18 de mayo de 1822 una manifestación orquestada con anticipación lo elevara al trono con título de emperador, lo que aconteció en ceremonia celebrada por autorización del Congreso, el 21 de julio. Se había nombrado un Consejo de Estado y esta modalidad de gobierno, contra lo que se creía, fue efímera; sólo duró 10 meses (mayo de 1822 a marzo de 1823).

La diputación provincial y el ayuntamiento potosino, guardando las formas y a imitación de lo que en todo el país sucedía, se apresuraron a felicitar oficialmente a Iturbide. Por el ayuntamiento, el 29 de mayo, firmaron Juan Ma. Azcárate, Ignacio Aztegui, Juan M. García Diego, Eusebio Esparza, Ignacio Guererro, Ignacio del Conde, Félix Gorriño, Antonio Escobar, Antonio Soto, Francisco Condelle, Ignacio Equía, José Vicente Liñán, Ignacio Ortíz y el Lic. Víctor Rafael Márquez, quien actuaba como secretario.

Pero si hubo algarabía, ceremonias, tedéum, iluminación en la capital, también hubo festejos en otras poblaciones de la provincia potosina, cual fue el caso de Valle del Maíz, donde el ayuntamiento levantó acta especial y se procedió a la jura del emperador, con adición de ceremonias civiles y religiosas.

De los primeros meses del imperio se conocen en San Luis algunos documentos, cuyo alcance jurídico los clasifica como de derecho público y son los siguientes:

Regencias del Imperio. Reglamento Adicional para la Libertad de Imprenta, 17 de diciembre de 1821.

Azcárate, Juan María de. Jefe político. Avisa al público. Lista de diputados electos para el Congreso Constituyente del Imperio y de individuos de la diputación provincial, electos el 28 de enero. San Luis Potosí, 30 de enero de 1822.

Bando, sobre un fraude de contrabando hecho en la villa de Benidorme, transcribe circular del Ministerio de Hacienda del Imperio, 31 de enero de 1822.

Azcárate... transcribe orden sobre presentar proyecto para la Constitución del Imperio, San Luis Potosí, 5 de febrero de 1822.

35 Anna, Timothy E., op. cit., p. 43.
36 Rodríguez Barragán, Nereo, "La jura del emperador don Agustín de Iturbide en el Valle del Maíz en octubre de 1822" Leíras Potosinas, (San Luis Potosí), año XXXIX, enero-mayo de 1981, núm. 27, pp. 24-25.
Azcárate... transcribe decreto de la Regencia del Imperio sobre supervisión de pasaportes para salir del Imperio... 12 de febrero de 1822.

Azcárate... transcribe decreto sobre el modo de felicitar al Emperador.  

No tardó Iturbide en tener problemas, enfrentándose incluso a levantamientos encabezados por personajes políticos y militares, como fue el caso de don Antonio López de Santa Anna; sin embargo

siendo los potosinos adictos a Iturbide y su gobierno, entre ellos no tuvo eco la proclamación de república, que en diciembre del año citado hizo Santa Anna en Veracruz; ni tampoco el Plan de Casa Mata..., no obstante por intrigas del Lic. D. Víctor Rafael Márquez, que había sido secretario del Ayuntamiento, la guarnición se pronunció el 2 de marzo, adoptando el Plan de Casa Mata y nombrando comandante general al coronel don Francisco Arce. Destituido el que lo era, don Zenón Fernández, se retiró con algunos soldados a la Villa de Soledad... la diputación provincial hizo saber que por ministerio de ley desempeñaría el empleo de jefe político el Lic. don Idelfonso Díaz de León.

Fueron muchas las causas de la caída de Iturbide y sobre ello mucho se ha escrito; sin embargo, en San Luis Potosí tenía simpatía la que no tuvo Santa Anna quien fue repudiado, en esa época, incluso por los militares. A final de cuentas la adhesión al Plan de Casa Mata fue la formalización de la ruptura potosina con el iturbidismo, aunque tiempo después y a raíz del fusilamiento del ex-emperador, los potosinos de esos tiempos seguían simpatizando con él, aunque no necesariamente con su esquema político, que decididamente tenía que ser superado a través del pacto federal.

Noticias de la época e investigaciones, informan del impacto que tuvo la emisión de billetes del Imperio mexicano en la intendencia potosina, especialmente porque los aspectos económicos a final de cuentas, son los que tienen peso respecto de la simpatía o antipatía a un gobierno. En efecto, ante el apremio para aliviar las carencias del tesoro público, se planteó como solución emitir billetes en calidad de préstamos o donativos; “la impresión de estos magníficos ejemplares es muy probable que fue hecha en la primer imprenta que se instaló en la capital del estado, bajo la dirección de don Juan de Dios Rodríguez”.

37 Cf. “Fondo Ramón Alcorta”, en poder de la Casa de la Cultura de San Luis Potosí; hojas volantes, carpeta núm. 1, núms. 12, 13, 14, 15, 16 y 17.

38 Velázquez, Primo Feliciano, op. cit., t. III, pp. 142-143; cf. Plan de San Luis Potosí, proclamado por el general Santa Anna, el 5 de julio de 1823.
Pasando la intendencia de San Luis Potosí, por aguda crisis económica y principalmente el gobierno... por ser muy adicto a la corona imperial, se le concedió el privilegio y la autorización para la emisión de estos famosos billetes, que aunque les dieron carácter de “donativo” y “préstamo voluntario” sólo se dispuso de ella, en su corta duración, para “casos muy urgentes”.

En el cuerpo de estos interesantes documentos dice la palabra: Billete la que tiene varias acepciones, pero la más adecuada esa: cédula emitida por un banco o por el Tesoro en remplazo de las monedas de oro y plata; con la palabra Billete justificaron su uso que fue de utilizarlos como papel moneda en pago de multas gubernamentales, multas judiciales e impuestos.

El sistema de esta emisión fue de rotación y recuperación. El gobierno emitió, el beneficiario entrega al gobierno y por ese medio se hace recuperable por el gobierno.

Emisión autorizada de billetes y moneda es materia, cuando la autoridad participa, del derecho público. En territorio potosino esta situación sucedió en 1822, poco antes de la emisión de billetes del Imperio a la que hemos hecho referencia, considerando la acuñación de pequeñas monedas de lámina de cobre, piezas denominadas de fondos públicos, y de las que son ejemplo de las de Catorce y las cuartillas del Mineral de Ramos. Otro ejemplo es la moneda de Guadalcazar de 1823, también de cobre y con su reverso liso.

La emisión de esta moneda fue hecha seguramente bajo las mismas circunstancias y tal vez bajo la misma autorización que en esa época se concedió

especialmente para aquellas poblaciones de la entonces provincia de San Luis Potosí que se distinguían por la explotación de su riqueza minera, pues las cuartillas de Catorce del año de 1822 y ésta moneda, ostentan la denomina-
ción de fondos públicos, con lo que se quiso expresar que estas piezas no
eran irregulares, sino que giraban bajo la vigilancia y responsabilidad del
Ayuntamiento de cada villa y en esta forma existía la garantía del poder pú-
lico en la circulación y el valor de estas piezas.42

Por otra parte, durante el periodo que duró el Imperio, San Luis Potosí
estuvo muy atento a los acontecimientos políticos y militares que se da-
ban en todo el país. Se aprecia entonces un interés marcado de los grupos
de poder locales por preservar una autonomía concertada, y ello es ma-
ñifiesto a través del quehacer de los miembros de su diputación provin-
cial. Por otra parte tuvo mucha influencia el peso de la élite militar que
se fraccionó, precisamente por el impacto del Plan de Casa Mata, y así,
con la abdicación de Iturbide, para la provincia potosina se abrieron op-
ciones interesantes que superaron la simple fuerza temporal de grupos
militares. En efecto, al llamado de nevos diputados al Congreso General,
se plantearon por algunos intelectuales juristas, opciones para un pacto
federal, no necesariamente centralistas. Sin embargo, mucho tendría que
darse a partir de la representación activa de esos personajes, así como
por el acomodo en el ayuntamiento de miembros de la oligarquía local, muy
unidos a militares, que al paso del tiempo fueron tomando posiciones es-
tratégicas.43 En efecto, en 1823, regresaron al ayuntamiento personajes como
Félix de Gorrínho, Martín Muriel, Pantaleón de Ipiña y Martín de Bergoa, todos
ellos ejemplo de integrantes de las clases acomodadas de la región.44

V. LA EVOLUCIÓN DEL DERECHO PÚBLICO POTOSINO DURANTE
LA ÉPOCA INSURGENTE Y EL IMPERIO DE ITURBIDE

Siendo varias las materias del derecho público, conocer de su evolu-
ción en época específica, representa un cierto grado de dificultad, dada
la diversidad de enfoques y criterios posibles para abordar el reto. Así

42 Idem, pp. 6-7.
44 Idem, actas de cabildo, libro 56.
pues considerando que este trabajo es de divulgación, más que de investigación, conocer la evolución del derecho público por sus efectos —que son hechos históricos concretos— es la manera en la que intentaremos desarrollar el tema que nos ocupa.

El papel y actividad de las autoridades en la aplicación del derecho público es vital; en efecto, ellas hacen cumplir la normatividad jurídica interpretándola. En el caso de San Luis Potosí, para entonces provincia gobernada localmente bajo la modalidad de intendencia, el papel del ayuntamiento de su capital, y la actividad de su cabildo dan la pauta, razón que justifica conocer la estructura administrativa de gobierno.

El ayuntamiento y su cabildo estructuralmente considerado es piramidal. En la cúspide se ubica el intendente (a veces nombrado o conocido como corregidor). A él le asiste un teniente letrado asesor (puesto que en el periodo de 1810 a 1823 aparece cubierto sólo de 1811 a 1820). En el siguiente estrato aparecen los alcaldes ordinarios, que son básicamente tres: el de 1er. voto, el de 2do. voto, y el de mesta. A continuación aparecen los regidores que son básicamente el alférez real, el alguacil mayor, el alcalde provincial de la Santa Hermandad y los regidores llanos, así como los honorarios (durante la época de nuestro interés, no todos los puestos de regidores se cubren y su número es irregular). Siganen los ministros que son varios, y los que no todos los años aparecen en la nómina: mayordomo del santuario, escribano del cabildo, mayordomo de alhóndiga, mayordomo de la ciudad, procurador síndico, procurador de pobres y macero.

De 1810 a 1823 la actividad del ayuntamiento potosino y su cabildo sufre, en su actuación algunas modificaciones, básicamente en razón de la circunstancia histórica de cambios políticos e ideológicos, tanto en la península, como en el país, así como por el impacto de la guerra civil. La jurisdicción militar cobra fuerza y a veces inhibe la actividad natural de la administración pública; fenómeno similar, pero de menor impacto es el propiciado por las autoridades religiosas, las que en forma directa o a través de cofradías, detentaban no sólo influencia política, sino poder económico y a veces actividad fiscal.45

En 1810, según el historiador Meade hay tres intendentes: uno interino, don Joseph Manuel Ruiz de Aguirre, quien desde 1805 detentaba esa calidad; don Manuel Jacinto de Acevedo que lo fue hasta 1812; en 1813 se le conoce como “intendente y jefe político”, para seguir con ese puesto hasta 1822, ostentando en 1821 el título de “intendente de ejército” y, también, en noviembre de 1810, efímeramente, don Miguel Flores, como “intendente insurgente” (en 1813 aparece como alcalde de 1er. voto; igual en 1814).

Para 1813, a partir de julio 4, el Ayuntamiento potosino recibe el calificativo de “constitucional”.

Los miembros de estos ayuntamientos podríamos clasificarlos como burócratas, oligarcas, algunos religiosos y militares; estos últimos aparecen incrustados en los niveles de regidores y ministros. En los puestos de mayor importancia destacan peninsulares y criollos oligarcas, algunos con título de abogados o bachilleres.

En 1813 hubo dos cabildos; básicamente cambiaron los alcaldes ordinarios y algunos regidores (hubo incluso personas que ostentaron en un mismo cabildo dos puestos, como don José Manuel de la Gándara, quien fue alcalde ordinario de la mesta y alférez real).

En 1820 nuevamente vemos dos ayuntamientos, cambiando básicamente el estrado de regidores.

Al Ayuntamiento de 1821 le sucede lo mismo, hubo dos cabildos; al segundo le toca, el 4 de julio, la jura de la independencia, la que se proclamó el sábado 7. Al de 1823 corresponderá vivir la época del Imperio de Iturbide.

Por supuesto, además del ayuntamiento de la capital de la intendencia, había otros dentro de la provincia potosina, pero el primero nombrado era supremo. Las jurisdicciones militares tuvieron peso y acción en la aplicación de algunas materias del derecho público.

La evolución que observamos en la época de nuestro interés respecto al derecho público, se dio primordialmente en:

a) Administración pública dinámica.
b) Aspectos penales, con incidencia de control para abatir y castigar delitos políticos.
c) Amnistías y juicios sumarios en delitos de orden político.

d) Control, de "hecho", a la libertad de expresión.
e) Controles económicos diversos y, por contra, apertura teórica.
f) Terrorismo fiscal y abuso de "prestamos forzosos".
g) Actividad diversa en legislación monetaria (acuñación y emisión).
h) Jurisdicción mezclada y a veces no respetada (civil, militar).
i) Participación ciudadana (aunque selectiva).
j) Dinamismo en seguridad y sanidad.
k) Control a movimiento de personas y cosas.
l) Preocupación —manifesta de algunos intelectuales y/o políticos—
por cambios de leyes.
m) Anhelo constitucional y democrático.
n) Representatividad (parlamentarismo en congresos).
ñ) Profusión de legislación en temas mineros.
o) Ruptura del enfoque tradicional, manifiesto incluso por la forma en
que las autoridades aplicaron el derecho público.

VI. A MANERA DE EPÍLOGO

Esta pequeña monografía la hemos justificado dando peso al objetivo
de un enfoque regional del desarrollo y evolución del derecho público,
y durante la etapa previa al pacto federal. Sus alcances son de divulgación,
y como pauta para que interesados profundicen en la rica veta de
estos temas poco explotados.

Por otra parte y basados en el rigor de la objetividad de las fuentes
consultadas, consideramos que el resultado, modestamente, presenta
versiones diferentes a la óptica maniquea de la historiografía tradicional,
donde solamente hay buenos y malos, y en la que son los personajes quién
definen la historia, y no ellos únicamente sus protagonistas. Sin dejar
de dar peso al papel relevante de varios personajes históricos, este trabajo
muestra el devenir del quehacer jurídico, como resultado de circunstancias
no sólo nacionales, sino también internacionales, pero lo más
importante, locales.

Las conclusiones son varias; la primera de ellas sustenta que el dere-
cho público en San Luis Potosí, durante la etapa de nuestra atención,
1808-1824, sí tuvo transformaciones, no sólo de forma sino de fondo.
Que ellas se basaron en la corriente publicista generacional que se en-
frentó, no sólo ideológicamente sino con hechos, contra el despotismo
monárquico. Que mucha de la evolución del derecho positivo público cristalizó a partir de cambios políticos y económicos. Que si bien tuvo peso el movimiento insurgente en cambios jurídicos, éstos se dieron en realidad como resultado de la contrarrevolución, que fue la que violentó la consumación de la independencia y el posterior advenimiento de un esfero imperio. Que el derecho público de la época se sistematizó poco a poco, a partir de la búsqueda de una ley fundamental que sería, en versiones y años diferentes, una Constitución. Que el derecho público de la época consideró como relevante el papel del estado, pero no con supremacía sobre el individuo. Que la metodología jurídica para procesos legislativos siguió el esquema tradicional, aunque mucho avanzó la precisión del respeto de jurisdicciones y, finalmente, que el derecho público con toda su evolución y avance fue superado por situaciones de hecho, en las que predominó la fuerza de grupos locales poderosos, aliados e identificados con otros formados por militares.

Lo que históricamente sucedió fue un pacto federal que tuvo necesidad de madurar, pero que desde su inicio se fundamentó en un esquema constitucional, en el que formalmente el derecho público quedó sustentado.

VII. FUENTES DE INVESTIGACIÓN
(DOCUMENTOS Y BIBLIOGRÁFICAS)

Por tratarse de un ejercicio tendente a la divulgación, este trabajo se sustentó en fuentes documentales y bibliográficas, muchas de ellas utilizadas únicamente como referencia y otras respaldando afirmaciones. Para lograr nuestro propósito las fuentes fueron cuatro: archivos, cuerpos legales, memoriales de intelectuales de la época y bibliografía general y especializada.

1. Archivos

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP) sus fondos:

- Intendencia de San Luis Potosí (1787-1821).
- Alcaldía mayor y archivo del Ayuntamiento.
- Protocolos (escribanos Ramón Othaegui y Mariano Suárez Medrano).
Casa de la Cultura de San Luis Potosí (CCSLP) arq. Francisco J. Cossío.

- Su fondo: Ramón Alcorta Guerrero (FRAG).

2 Cuerpos legales

- Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España, 1788.
- Bando de Buen Gobierno, de 1790, atribuido al intendente don Bruno Díaz de Salcedo.
- Ordenanza de la División de la Muy Noble Ciudad de San Luis Potosí en Cuarteles, Creación de los Alcaldes de ellos y Reglas de su Gobierno, dada y mandada observar por el Exmo. señor Márquez de Branciforte, de 1794.
- Ordenanzas que debe Guardar la muy Noble y Leal Ciudad de San Luis Potosí, redactadas por don Juan Mariano de Vildósola, regidor del Ayuntamiento, en 1806.
- Documentos diversos (referidos en el texto): circulares, proclamas, reglamentos, órdenes, oficios, decretos, etcétera.

3. Memoriales de intelectuales de la época

- Fray Antonio de San Miguel, obispo de Michoacán (escrito póstumo), de 1804.
- Dr. Manuel de María Gorriño y Aduengo, Contestación al Ayuntamiento de San Luis Potosí, 1809.

4. Bibliografía

ALAMÁN, Lucas, Historia de México de los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente, México, Editorial Jus, 1942.


BRADING, D.A., Mineros y comerciantes en el México borbónico (1763-1810), México, FCE, 1975.

CARDIEL REYES, Raúl, Del modernismo al liberalismo, la filosofía de Manuel Gorriño, México, UNAM, 1981.


FLORES CABALLERO, Romero, La contra-revolución en la Independencia: los españoles en la vida política, social y económica de México (1804-1838), México, El Colegio de México, 1969.


GONZÁLEZ OBREGÓN, Luis, La vida en México en 1810, México, s. d., 1910.


—, El real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1975.


—, La Administración pública en la ciudad de San Luis Potosí, a finales del siglo XVIII y principios del XIX (algunas bases jurídicas que sustentaron la actividad del Ayuntamiento y su cabildo durante la época de la Intendencia), San Luis Potosí, H. Cabildo del Ayuntamiento, 1992.

—, “La educación elevada a rango constitucional en un proyecto de la Primera Constitución Potosina (notas histórico-jurídicas)”, Quinto Congreso de Historia del Derecho Mexicano, noviembre 1990.

PEDRAZA M., José Francisco, Biografía del Dr. Manuel M. Gorriño y Arduengo, San Luis Potosí, 1943.


REEs JONES, Ricardo, El despotismo Ilustrado y los intendentes de la Nueva España, México, UNAM, 1979.

—, Real Ordenanza para el Establecimiento e Instrucción de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva España 1778, México, UNAM, 1984.


—, "La Jura del Emperador D. Agustín de Iturbide en el Valle del Maíz en octubre de 1822", Letras Potosinas, San Luis Potosí, año XXXIX, núm. 227, enero-mayo de 1921.

—, Biografías Potosinas, San Luis Potosí, Academia de Historia Potosina, 1976; (En esta obra se dan semblanzas de algunos personajes de la época insurgente; Félix Ma. Calleja del Rey; doña Francisca Gándara de Calleja del Rey, Flores y Burder —virreina mexicana— esposa de Calleja; D. Manuel Ma. Gorriño y Arduengo; fray Gregorio de la Concepción; José Mariano Jiménez; D. Lugardo Lechón (periodista); fray Antonio de Otahegui; brigadier Fernando Rosas; D. Juan Villerías (lego); Fernando Zamarripa y otros como Herrera, Olmedo, Lima y el franciscano Manrique, mártires de la independencia).


VILLORO, Luis, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, México, UNAM, 1967.


ZAVALA, Lorenzo, Ensayo histórico de las revoluciones de México, desde 1800 a 1830, México, Centro de Estudios Históricos del Agrarismo-SRA, 1981.